

AECPA, 2019

El liberalismo antidemocrático a revisión: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México

Ricardo Espinoza Toledo

Universidad Autónoma Metropolitana – I

México

etr@xanum.uam.mx

Resumen

En ausencia de una democracia desarrollada y sin derechos sociales y civiles garantizados a la mayoría de la población, los gobernantes mexicanos impulsaron reformas para implantar un modelo económico basado en el libre mercado. El retiro del Estado de sus funciones sociales hizo más pobres a los pobres y más débil a un Estado de por sí afectado por la corrupción, la impunidad y la delincuencia. En esas circunstancias, no se obtuvieron ventajas sociales del libre comercio ni de la globalización ni se fortaleció el sistema representativo. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador, en julio de 2018, encuentra ahí su explicación, como también la necesidad de cambiar políticas igualmente cuestionadas en las democracias establecidas.

Nota biográfica

Doctor en ciencia política por l'Université de PARIS I-Panthéon-Sorbonne

Profesor titular de la Universidad Autónoma Metropolitana – I

Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores

Líneas de investigación: sistemas políticos, relaciones Ejecutivo-Legislativo y partidos políticos

Palabras clave

Liberalismo, desigualdad, democracia, Estado, justicia social

El liberalismo antidemocrático a revisión: el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México

Ricardo Espinoza Toledo

Introducción

Actualmente, los centros de poder más importantes en el mundo occidental han abrazado fórmulas del liberalismo económico sin dar cabida incluso a ciertas opciones económicas y políticas promovidas por corrientes y movimientos sociales. Los sistemas de gobierno representativo han padecido serios cuestionamientos porque las economías en crisis han afectado a las democracias establecidas. En la era del conservadurismo, las fallas del proyecto neoliberal han sido también las del sistema de gobierno representativo, al que se requiere fortalecer con mecanismos directos de participación social. En América Latina, no es muy diferente la situación, pero sí más desventajosa. Aunque la derecha sigue predominando y ha ocupado nuevos espacios muy importantes, la izquierda democrática sigue luchando en territorios y medios sociales desfavorables.

El orden económico mexicano actual no fue el resultado de la dinámica ineluctable de los mercados, sino más bien la consecuencia de decisiones políticas deliberadas tomadas por gobiernos no democráticos. Precisamente por eso, el poder político del capital se presentó en su máxima expresión. Ese proyecto no miraba el interés de los ciudadanos, sino el desarrollo de la empresa privada, sin tampoco importar si estaban dadas las condiciones sociales y económicas básicas para darle cauce. Por ello, desde los primeros años ochenta, los mercados definieron la agenda política. Los ciudadanos mexicanos no habían ganado aún la capacidad de influir en el gobierno. El control político y económico se concentraba en una oligarquía sostén del presidencialismo que la cobijaba. Tuvieron el control el poder, pero no el respaldo social. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en México, por la vía electoral, es portadora de la exigencia social de cambiar el liberalismo antidemocrático por nuevas políticas.

Como analizamos en este texto, si bien la exigencia de cambios en las democracias establecidas es bastante acentuada, en las nuevas democracias, con Estados débiles, como en México, los efectos devastadores de políticas antipopulares obligan a su revisión.

Contradicción en las democracias establecidas

Los efectos depredadores de las políticas neoliberales adoptadas en Gran Bretaña (GB) y Estados Unidos de América (EUA), y exportadas a todo el mundo occidental, afectaron fuertemente a las mayorías sociales y al sistema representativo. El signo de esas políticas ha sido la agudización de la desigualdad social y el consecuente surgimiento de una movilización social de protesta, más espontánea que organizada, por fuera de los partidos políticos tradicionales, y el ascenso de las fuerzas de la derecha xenófoba. Es la respuesta social a gobiernos que no han atendido el bienestar de las personas.

Esto apunta a las insuficiencias del modelo de gobierno democrático. Surgió el movimiento en favor del Brexit y el de quienes querían mantenerse en la Unión Europea (UE), con la consecuente inestabilidad ministerial en GB; en EUA, se dio el apoyo masivo de los fundamentalistas blancos a Donald Trump y aumentaron los cuestionamientos al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) y a la inmigración, percibidos como causantes de desempleos y de perjudicar salarios, y se desplegó el movimiento social conocido como Les Gilets Jaunes, en Francia que, en paralelo al fortalecimiento de la extrema derecha, cuestiona el sistema representativo, a los partidos tradicionales y las políticas imperantes.

El origen del problema, no obstante, es de carácter político, porque es en las instituciones representativas de la democracia donde se toman las decisiones que afectan a la colectividad, destacadamente las que definen el programa económico. Y los efectos negativos del liberalismo económico adoptado han afectado a las instituciones de gobierno en democracia.

Las democracias desarrolladas enfrentan problemas serios. *Demos* (2013) observaba cómo la incapacidad de la democracia europea para dar respuesta a demandas sociales, como el bienestar, la desvirtuaba; Freedom House, en su informe de 2018, reconoció que la democracia está en crisis. De acuerdo con Diamond (2008) vivimos una recesión democrática. No se refieren a las nuevas democracias o a democracias no consolidadas, sino a las democracias establecidas. Sucede que las economías en crisis han desestabilizado los modelos políticos democráticos, generando un círculo vicioso producido por decisiones de política económica que apostaron a la desregulación, es decir, a la libre competencia económica. Significa que no estamos hablando del resultado ciego de fuerzas imprevisibles.

El orden económico actual fue la consecuencia de decisiones políticas deliberadas tomadas por gobiernos democráticos (Iversen y Soskice, 2019). El capitalismo avanzado produjo una nueva clase media, cuyas experiencias e intereses de vida la hacen progresista en lo social, en coexistencia con las antiguas clases medias, en decadencia, y las bajas, que se encuentran en situación difícil. La creciente desigualdad que acompaña la transformación del capitalismo no ha sido contrarrestada eficazmente por una mayor redistribución. La responsable de esa situación es la manera en que funciona el sistema democrático.

La poca movilidad social hace que las antiguas clases medias y bajas se vuelven susceptibles a los populistas de derecha, con fuerte presencia en EUA y Europa. Su éxito está relacionado con la nueva economía porque las clases medias y bajas y sus hijos sienten que han sido excluidos de forma permanente de las oportunidades. La derecha populista prospera, en otras palabras, allí donde la democracia no brinda oportunidades para todos. Donde hay pocas barreras a la buena educación y a la capacitación, los valores populistas están mucho menos acentuados (Iversen y Soskice, 2019). También existe una fuerte tendencia a que las personas menos capacitadas voten en favor de esos populistas de derecha.

Aunque algunos de estos hablan el idioma de las clases trabajadoras, realmente no les interesa combatir la pobreza, afirman estos autores.

El compromiso con las normas de la democracia liberal, así como el derecho al voto y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, ha retrocedido en las democracias establecidas (Diamond, 2008). Vastas franjas sociales han sido aisladas de la contestación democrática (Mounk, 2018). El papel de los bancos centrales independientes y la forma en que el comercio se rige por acuerdos internacionales que se crearon en negociaciones casi secretas realizadas en instituciones remotas y apartadas, afecta a la participación social. En áreas como los impuestos, los representantes electos conservan la autonomía formal, pero la movilidad global del capital restringe la libertad de los políticos, que a su vez reduce las diferencias entre los partidos moderados, de izquierda y derecha.

Las instituciones se enfrentan a sociedades cada vez más complejas, con necesidades también diversas, que no están siendo procesadas adecuadamente por el sistema institucional. Al mismo tiempo, la economía liberal no ha dado los resultados esperados. Las organizaciones que representaban a la mayoría de la gente común, como los partidos de centro izquierda y los sindicatos, dejaron de hacer su trabajo (Mounk, 2018), quedando el campo libre a decisiones antipopulares.

Apareció entonces la contradicción, porque los regímenes democráticos se revelaron incapaces de resolver los problemas que surgieron directamente de las políticas liberales adoptadas, causa de descontento y de la protesta social. Así, el sistema representativo padece las consecuencias de su éxito, el de ser una estructura de gobierno cuya cualidad definitoria es asegurar las libertades políticas.

Las fallas del liberalismo antidemocrático adquieren rasgos más graves en las democracias incipientes y de Estado débil, como en México.

El liberalismo antidemocrático en México

Los gobiernos mexicanos abrazaron el liberalismo antidemocrático como opción de desarrollo económico. Se le entiende como una democracia débil, en la que los vínculos sociales y la seguridad económica se sacrifican en el altar de la libertad individual (Mounk, 2018). Inicialmente fue la combinación de presidencialismo unipartidista (no competitivo) con liberalismo económico. Y la alternancia presidencial, a partir del año 2000, afianzó el proyecto económico: eso se presentaba como “el cambio político”. Hubo alternancia, pero no se ofreció alternativa. La privatización se erigió como la solución de todos los males y la intervención del Estado como causa de los problemas. Pero el credo de la libertad individual fue en detrimento de los ingresos, de por sí bajos, y de los vínculos sociales, de por sí dañados

El gobierno mexicano adoptó, desde los últimos años ochenta, el Consenso de Washington, una lista de diez políticas que contienen un paquete de medidas económicas pensadas para los países de América Latina, que con los años se

convirtió en un programa casi obligatorio. Las medidas eran: disciplina fiscal para acabar con el desequilibrio macroeconómico; reordenamiento de las prioridades del gasto público reduciendo la inversión en salud, educación e infraestructura; reforma impositiva para aumentar impuestos; liberalización de las tasas de interés; una tasa de cambio competitiva definida por el mercado; liberalización del comercio internacional para poner fin al proteccionismo; liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas; privatización para limitar la intervención del Estado; desregulación para fomentar la competencia y garantía a derechos de propiedad (Mosley, 2003). Los organismos financieros internacionales (FMI, BM), el Congreso de los EUA, la Reserva Federal, los altos cargos de la Administración y los institutos de expertos económicos con sede en Washington se encargarían de regularlos. Esa lista se convirtió en la base de lo que se denominó neoliberalismo, que posteriormente fue ampliada y corregida debido a sus efectos contraproducentes, que no por eso se eliminaron. El eje de esas políticas es la defensa de la libertad económica (Bobbio, 1994). Con el nombre de liberalismo-social, desde la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) se adoptaron esas medidas e integraron el programa de los sucesivos gobiernos mexicanos, y fueron impuestas por medio de un ciclo de reformas que se cerró con las promovidas por el Pacto de 2012.

La crítica al proteccionismo, al excesivo intervencionismo del Estado y a la incapacidad del gobierno para controlar el déficit público, consideradas como las causas fundamentales de la crisis económica de Latinoamérica, han estado lejos de resolver los problemas. Al limitar el gasto público, se logró bajar la inflación y el déficit presupuestario, disminuir la deuda externa y aumentar el flujo de capitales. Sin embargo, tuvo otras consecuencias negativas, porque no se consiguió el crecimiento económico buscado: la década de los noventa se conoce como “la década perdida”: aumentó la desigualdad, no hubo mejora ni progreso social y se registró un deterioro de los derechos humanos. Aun así, como tendencia mundial, se ha tendido a aceptar que las fuerzas del mercado pueden ser reguladas, pero no eliminadas, y que esa regulación debe hacerse en coordinación con otros países; que el crecimiento del gasto público debe ser frenado; que el Estado de bienestar puede ser defendido pero no ampliado; que la privatización puede ser inevitable e, incluso, cuando erradica monopolios, deseable; que la igualdad, aunque permanezca como un objetivo a alcanzar, puede ser atenuada por la necesidad de preservar la competencia; que el poder de las instituciones financieras internacionales -y, sobre todo, de los mercados financieros- solo puede ser contenido (si acaso ello es posible) por acuerdos internacionales y no por políticas estatales unilaterales (Sassoon, 1997).

Este estrechamiento es explicado con base en tres fenómenos: a) los cambios en la economía internacional: el alto grado de integración de los mercados y la creciente capacidad de empresas e inversionistas para desplazar la producción y el capital a través del mundo; b) los cambios en las sociedades nacionales: la ampliación de las clases medias, políticamente moderadas como resultado de la industrialización y el crecimiento económico que conlleva y c) los cambios en la naturaleza de los partidos políticos: para poder ganar elecciones y ser competitivos, los partidos “buscan votos en cualquier lugar” (Offe, 1996), dejan de dirigirse a

sectores específicos de la población y generalizan su “área de atracción social” (Kirchheimer, 1980). A ello se atribuye la incapacidad de los partidos para formular alternativas políticas al capitalismo (Hirsch, 1996).

Los partidos importan. Los innumerables miembros, individuales y colectivos de la izquierda no partidaria carecen, por sus propias características, de posibilidades para articular el conjunto de demandas, así como para canalizar y expresar organizadamente el descontento. Desde esta perspectiva, los movimientos sociales por el carácter sectorial o corporativo de los objetivos que persiguen tienen dificultades para pensar y proponer soluciones para todo el país y mucho más para pensar las dimensiones transnacionales de los procesos (Harneker, 2002). En tanto estructuras permanentes formadas voluntariamente por ciudadanos, los partidos conforman un capital político necesario para apoyar programas de transformación social o sostener a sus gobiernos.

En México, los partidos que adoptaron el libre mercado como programa en un país caracterizado por la desigualdad son el PAN, el PRI y, sin faltar a la ambigüedad, el PRD. En otra vertiente, moderada, pero progresista, se encuentra Morena. Esa división no supone consecuencias negativas o destructivas políticas o económicas mayores a las experimentadas hasta ahora, pero debe asentarse en el supuesto de que los diferentes intereses se hayan mejor representados en partidos políticos distintos. Mientras persista la inseguridad, la corrupción y la exclusión económica y social de las mayorías, el nivel de tensión social se mantendrá tanto como la necesidad de algún partido político que encabece su combate. Solo un partido comprometido con el mejoramiento de la situación de esas mayorías, y que sea renovador e igualitario, puede competir con los que han llevado a México al estancamiento. Para ello, debe asumir la responsabilidad del desarrollo económico del país y, por lo tanto, corregir los desvíos causados por la industrialización, la urbanización sin planeación, el problema de la vivienda, la pobreza y la corrupción.

La exigencia social de otra política

Los gobernantes panistas y priistas se dedicaron a administrar un proyecto económico importado. Desde los años ochenta, para unos y otros gobernar era entendido como una forma de ejercer el poder para instaurar un modelo económico ajustado a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), el conocido como Consenso de Washington. El programa de gobierno contaba con el respaldo de esos organismos y de las calificadoras de riesgo crediticio que evaluaban, no la adecuación social de las políticas, sino la fidelidad de los gobiernos.

Los gobernantes mexicanos se dedicaron a administrar las nuevas políticas y los recursos públicos, promoviendo incesantes cambios a la Constitución y a las leyes para adecuarlas al libre mercado. Pero la democratización en curso, que dio paso a la primera alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, también instauró la presencia de presidentes minoritarios en el Congreso. El presidente Vicente Fox (2000-2006), surgido del PAN, no acató que “el gobierno propone y el Congreso dispone”, promesa hecha en su toma de protesta. Lo que en realidad

quería era la disposición del Congreso en favor de las “reformas estructurales”, sin éxito. El presidente Felipe Calderón (2006-2012), otro panista, descubrió, hasta después de la derrota del PAN en las elecciones intermedias de 2009, que era “tiempo de pasar de las reformas posibles a las reformas necesarias”. No pasaron las posibles y tampoco llegaron las necesarias. En su actividad proselitista, el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, decía que debían votar por él porque, a diferencia de los panistas, “nosotros sí sabemos gobernar”, pero no sabían. Minoritario en el Congreso, como sus predecesores, el Pacto de 2012 le permitió encapsular a la muy dispuesta oposición panista y perredista, condición para controlar al Congreso de mayoría opositora y hacer aprobar, con otras, la reforma energética que privatiza el petróleo y la generación de energía eléctrica.

Los de la transición no admitieron que el ser presidentes minoritarios en el Congreso era parte de un mandato ciudadano al que debían ajustarse. Estaban convencidos de que su llegada a la presidencia de la República los eximía de cualquier compromiso social y que el bienestar de la gente venía en el paquete que los organismos financieros internacionales les encomendaba. No entendieron por qué los ciudadanos no les daban el respaldo mayoritario que reclamaban. Sostenían que, sin mayoría propia en el Congreso, el “cambio” se atoraba. Para ellos, el cambio era seguir en la misma ruta, aquella cuyos efectos eran mayor concentración de la riqueza y el desfaldo de los recursos públicos.

Para la ciudadanía, sin embargo, el cambio era abrir una ruta diferente. El Congreso, mayoritariamente opositor, estaba llamado a desempeñar el papel de balance y contrapeso al proyecto promovido por los presidentes minoritarios. Tampoco funcionó. Por eso, uno de los atractivos de López Obrador, primer presidente mayoritario desde que hay alternancia en México, fue su rechazo a la élite que ha controlado el poder político y los recursos públicos. Hay razones para sostener que el triunfo contundente de Morena es, en gran medida, resultado de reformas y políticas gubernamentales que, en la práctica, eludieron la protección de los derechos sociales y civiles. Con ello, el liberalismo antidemocrático que se impuso en la práctica de los gobernantes y en la Constitución, en contraposición a la decisión de la mayoría de los ciudadanos, fue rechazado en las elecciones de 2018.

También fue rechazado el uso ilegal de los dineros públicos. Un Estado desfondado por el saqueo de los recursos, por el robo de combustibles, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), la crisis financiera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a contratos ventajosos a empresas privadas; un Estado igualmente incapaz de evitar el dinero ilegal, da la imagen de un ducto perforado por el que se fugan los recursos públicos. Evasión y elusión fiscal y condonación de adeudos fiscales a grandes empresas, elevadísimos montos de transferencias de recursos a estados y municipios, sin aclarar buena parte (ASF, 2019), además de la inflación, el endeudamiento incontrolado de los estados de la Federación y la violencia criminal, agravaron el cuadro.

Aunque en todo el mundo hay personas en situación de pobreza, el problema en México es que la mayoría de sus adultos no goza de los derechos, libertades y

oportunidades fundamentales y efectivos. Ese límite a los derechos lo es también a la participación y al desarrollo del mercado interno. Como los gobernantes y sus socios impusieron un modelo económico lesivo a los intereses de las mayorías, en julio de 2018 se votó masivamente para corregir el rumbo. Los ciudadanos no dudaron en darle el respaldo a López Obrador y Morena. El mensaje de las urnas es que el predominio de Morena, resultado de la competencia política, sirva para que los bienes públicos estén al servicio de las mayorías.

Otra política posible

EUA y la Europa occidental se caracterizan por sus democracias liberales desarrolladas. Ahí, la demanda social tiene que ver con la necesidad de “democratizar la democracia”, es decir, abrir más la toma de decisiones que afectan a los individuos. Los gobiernos han tomado decisiones que van en dirección contraria a las posiciones sociales mayoritarias: el TLC, en EUA; la forma de integración a la EU (y el consecuente Brexit), en Gran Bretaña o el deterioro de las condiciones de vida, en Francia, han generado un notorio desfase entre gobernantes e intereses sociales. Se explica, así, la derrota de los demócratas y el triunfo de Donald Trump, en EUA; la derrota de la izquierda moderada en Francia, así como el triunfo de Emanuel Macron y los posteriores cuestionamientos a su gobierno, o la inestabilidad ministerial, en Gran Bretaña, que primero llevó al gobierno a Theresa May y, luego, a su reemplazo. Les Gilets Jaunes, en Francia, reclaman ser tomados en cuenta en las decisiones que afectan la vida cotidiana de las personas, similar a la demanda que hay en GB y en EUA. En el centro de esas protestas y movilizaciones se pone la seguridad material de las personas, que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes o no disponen de un trabajo bien remunerado.

En términos generales, la movilización social se ha desmarcado de los partidos políticos. Hay un rechazo a los partidos tradicionales y un reclamo a los gobiernos que, dicen, no los representa. El de Gilets Jaunes ha sido un movimiento amplio y espontáneo, del pueblo, dicen ellos, que inició protestas el 17 de noviembre de 2018. Emanuel Macron ganó la elección presidencial por haber tomado la bandera en favor del bienestar de las personas, que le granjeó fuerte respaldo social a su movimiento. En esas elecciones, la gobernante izquierda socialista fue severamente castigada. Sin embargo, el gobierno Macron no varió la ruta del liberalismo económico concentrador de la riqueza. En EUA, el Presidente Trump no es un hombre de partido. Una de sus consignas de campaña fue acabar con “la política de Washington”. Su crítica a los políticos y a los partidos contribuyeron a su triunfo en las elecciones de 2016, siempre bajo el cobijo de los Republicanos. También contó su rechazo a los efectos negativos del libre comercio y la globalización, causa, asegura, de la desigualdad y desventaja de los trabajadores estadounidenses. En GB, el problema es el empobrecimiento y la precariedad que padecen sus habitantes, cuya traducción política es la lucha por mantenerse o no en la UE.

En la base de esas protestas y movilizaciones están los cuestionamientos a la democracia formal promotora del liberalismo económico, un sistema representativo que actúa en favor de los beneficiados de siempre, como ha sostenido Oxfam

(2014), en referencia a EUA y Europa occidental. En noviembre de 2013, el Foro Económico Mundial, por su lado, publicó el informe *Perspectivas de la Agenda Mundial 2014*, que situaba el aumento de la desigualdad en los ingresos como la segunda mayor amenaza mundial. Según las personas encuestadas, la desigualdad “está afectando a la estabilidad social en el seno de los países y supone una amenaza para la seguridad en el ámbito mundial”.

La mundialización económica fue impuesta por las élites políticas, y ha ido en detrimento del bienestar de las mayorías populares (Guenolé, 2016). La batalla no puede reducirse a una lucha entre ese liberalismo económico y el populismo de derecha, en consecuencia. El presidente de Hungría, Víctor Orban, puso a circular la idea de una democracia “iliberal”, concebida como una forma de amputar el contenido depredador de las políticas económicas del libre mercado para mirar el interés del pueblo. Pero Orban no plantea asegurar los derechos individuales, el mayor dique de contención al ejercicio arbitrario de poder, sino decidir por encima de las instituciones y en favor de políticas conservadoras. Sus reformas ponen límites a la democracia porque afectan la libertad de prensa, al Poder Judicial y al Banco Central, y se acompañan de políticas antimigrantes, en rivalidad con la UE, de la que Hungría forma parte. No es la única opción en juego.

De inicio, la garantía de libertades políticas es el fundamento de cualquier democracia. No es sostenible una democracia despojada de los mecanismos de protección de derechos individuales. En Francia, los GJ plantean acciones de democracia directa que aseguren la participación de los distintos grupos sociales en paralelo a los mecanismos representativos. El propósito no puede ser otro que ampliar los alcances de la democracia representativa. Los sindicatos nacionales se sumaron a la ola de movilizaciones para exigir mejoras salariales, e incluso la renuncia del Presidente Macron. El Presidente francés convocó a los Diálogos Nacionales (2019) buscando encausar la protesta que reclama el bienestar que prometió en campaña.

A pesar de los cuestionamientos, la democracia representativa sigue funcionando y los grupos sociales se expresan por medio de manifestaciones en las calles, también espacio de las libertades políticas y fundamento del sistema representativo. El desarrollo de movimientos sociales que promueven mecanismos de democracia directa, como el referéndum o la iniciativa ciudadana, no pueden verse como amenaza a la democracia representativa. Sus exigencias buscan superar los límites institucionales del sistema representativo y, con ello, fortalecer la participación democrática.

La situación en EUA, GB y Francia muestra las fallas del liberalismo económico. El mercado abierto es fuente de mayores desigualdades que ponen en tensión al sistema representativo. Solo que la decisión de impulsar y sostener ese programa económico corresponde, precisamente, a un sistema que excluye a los grupos sociales desfavorecidos. En ese sentido, las fallas del proyecto neoliberal lo son también de la democracia representativa.

Más complicado es lo que sucede en las democracias incipientes, de Estado débil, como en México. Combatir la corrupción y la impunidad que borraron la frontera entre el crimen y la política es una tarea de regeneración. Creyendo que las privatizaciones resolverían todos los problemas, los gobiernos anteriores no se ocuparon en afianzar un verdadero Estado de Derecho. La estructura centralizada de poder, a su vez, no se modificó en la época de presidentes minoritarios, del 2000 al 2018, cuando había las condiciones para hacerlo.

En realidad, el autoritarismo fue la condición política para imponer las “reformas estructurales” recomendadas por los organismos financieros internacionales. De ese modo no podían generar una democracia fuerte, sino solo una serie de instituciones fragmentadas y capturadas por intereses privados. La falla de los partidos y sus gobernantes fue no impulsar el cambio requerido y someterse a la oligarquía dominante. Hicieron más desiguales a los desiguales y la polarización se volvió un fenómeno social.

La búsqueda de la paz social y el progreso económico forman parte de las tareas del nuevo gobierno, en el marco de la democratización que supone instituciones fuertes como medio para asegurar la participación plural y evitar que un grupo privilegiado siga imponiendo su orientación y sea el único que puede decidir. Le corresponde, además, proteger la libertad individual, fortalecer el mercado interno, ampliar los tratados comerciales y apoyar la prensa independiente y a las organizaciones sociales (empresariales, sindicales, civiles). Al mismo tiempo, debe impulsar avances en calidad de vida, salud, consumo, macroeconomía y otros indicadores objetivos a atender.

La promoción de reformas profundas en los sectores energético, educativo, laboral, de telecomunicaciones y competencia económica y fiscal y la idea de asegurar los equilibrios macroeconómicos y de lograr los microeconómicos no hace a todos los partidos iguales. En sus postulados, Morena se muestra contraria a las privatizaciones y pone la mira en la justicia social. Tampoco se puede perder de vista que, en la actualidad, la mayoría de los gobiernos en el mundo son blanco de la diversidad de demandas, muchas de ellas emanadas del fenómeno globalizador, y tratan de establecer políticas acordes a esas demandas, porque son principalmente factores internos los que frenan las posibilidades de un buen desempeño económico. Sin cambios en materia de seguridad pública, Estado de derecho y combate a la corrupción, en México, cualquier reforma estará incompleta y estancada.

Finalmente, el cambio propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador conlleva la posibilidad de construir un piso común de igualdad y mayor bienestar social, así como la garantía de los derechos y las libertades de las personas y de las minorías en el marco de un desarrollo económico competitivo, sostenido y sustentable. Es la promoción de una política de libre mercado con sentido social dentro de la globalización y de medidas para la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías. En un país en el que más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza y extrema pobreza, el programa consiste en

impulsar la justicia social, la igualdad y las libertades, en condiciones de creciente democratización y vigencia del Estado de derecho, buscando reducir las profundas desigualdades sociales. Por eso, para garantizar la convivencia pacífica, son necesarias nuevas políticas.

Bibliografía

- Bobbio, Norberto, 1994. *Liberalismo y democracia*. México, FCE.
- Demos, 2013. *Medición de la democracia en la UE*. "Democracy in Europe can no longer be taken for granted..." Backsliders: Jonathan Birdwell, Sebastien Feve, Chris Tryhorn, Natalia Vibla. Demos, London. www.demos.co.uk
- Diamond, Larry, 2008. Doing Democracy Promotion Right. *Newsweek*. California, EUA, 30 de diciembre.
- Espinoza Toledo, Ricardo, 2007. Presidencialismo, parlamentarismo y sistema mixto, en AAVV. *Tratado de Ciencia Política*. España, Anthropos – UAMI.
- Foro Económico Mundial, 2014. Perspectivas de la agenda mundial 2014. Ginebra: Foro Económico Mundial. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalAgendaOutlook_2014.pdf
- Guenolé, Thomas, 2016. *La mondialisation malheureuse. Inegalite, pillage, oligarchie*. First, France.
- Harneker, Martha, 2002. *La izquierda después de Seattle*. España, Siglo XXI.
- Hirsch, Joachim. 1996. *Globalización, capital y Estado*. México, UAM-X.
- Iversen, Torben y David Soskice, 2019. *Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism Through a Turbulent Century*. Princeton UP, Princeton.
- Kirchheimer, Otto, 1980. El camino hacia el partido de todo el mundo, en K. Lenk y F. Neumann (eds). *Teoría y sociología crítica de los partidos*. Barcelona, Anagrama.
- Mosley, Layna, 2003. *Global Capital and National Governments*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Mounk, Yascha, 2018. *The people vs democracy: why our freedom is in danger and how to save it*. Harvard University Press.
- Offe, Claus, 1996. *Partidos políticos y movimientos sociales*. Madrid, Sistema.
- Oxfam, 2014. *Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica*. 178, Informe de Oxfam, 24 de enero. www.oxfam.com
- Sassoon, Donald (ed), 1997. *Looking Left. European Socialism After the Cold War*. Londres, I. B. Taurus.